

Derechos de las personas con discapacidad

17

Balance de las recomendaciones anteriores

En 2018, 10 países presentaron recomendaciones en relación con los derechos de las personas con discapacidad: México, Venezuela, Uruguay, Indonesia, Perú, Afganistán, Níger, Portugal, Chile y Chipre.

La recomendación de cuatro países fue la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en adelante CDPD, la cual todavía no se ha cumplido. También se recomendó la adopción de normas encaminadas a la protección y garantía de derechos, en especial de educación y salud.

En Colombia, algunos avances en el reconocimiento se han dado, entre otros, con la expedición del Decreto 1421 de 2017 y la Ley 1996 de 2019, así como las sentencias de constitucionalidad y de tutela que han desarrollado la aplicación de cada normativa. Pese a los avances en el reconocimiento legal de derechos de las personas con discapacidad, existen diversos obstáculos para su garantía efectiva.

Desafíos

Ratificación del Protocolo Facultativo de la CDPD. Ratificar el Protocolo Facultativo fortalece las disposiciones de la CDPD frente a la garantía de sus derechos. Contribuye a la toma de conciencia del Estado colombiano respecto a su obligación garantizar, hacer veeduría, control y seguimiento al cumplimiento de estos derechos y a disminuir el estigma y auto estigma que vive este colectivo.

No se contempla la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación, ni se han generado acciones concretas para garantizar el acceso a ajustes razonables o mecanismos que permitan registrar las quejas por denegación de estos.

A la fecha no se han reglamentado ni expedido normas jurídicas concretas destinadas a la realización de ajustes razonables en materia de empleo. Por lo tanto, no es claro para las empresas empleadoras los criterios y bases conceptuales por medio de las cuales se deben diseñar e implementar ajustes razonables en los distintos objetos, espacios y escenarios de su relación laboral con personas con discapacidad. Así, cualquier ajuste o modificación realizada es el producto de la buena fe y el desarrollo voluntario de los empleadores respecto de la CDPD, los cuales además pueden ser considerados arbitrarios, insuficientes y desvalorados.

Socialización y apropiación a nivel nacional en todas las entidades e instituciones prestadoras de salud de lo contemplado en la resolución 1904/2017, del Ministerio de Salud y Protección Social.

La resolución 1904 de 2017 responde a la solicitud que hizo la Corte Constitucional al Ministerio de Salud, para garantizar que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su salud sexual y salud reproductiva. Así mismo garantizar este derecho, por medios servicios oportunos, accesibles, con enfoque diferencial y durante el curso de vida de las personas con discapacidad. Esto debe complementarse con la implementación de la Ley 1996 de 2019 que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad que sean mayores de edad.

Recomendaciones

1. Ratificar el Protocolo Facultativo de la CDPD.
2. Definir el alcance de la obligación de empleadores en relación con la adopción de ajustes razonables en el escenario laboral y en procedimientos disciplinarios y fortalecer guías, actividades y herramientas para la colocación y afianzamiento de personas con discapacidad en el mercado laboral.
3. Que el Ministerio de Salud, a través de las entidades prestadoras de servicios de salud, garantice a las personas con discapacidad el acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así como proveer los apoyos necesarios, hacer los ajustes razonables y establecer salvaguardias, para que el colectivo de discapacidad goce plenamente de estos derechos.